

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

TITULO:

**“LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL TAMBIÉN ES UNA GARANTÍA
DEL DEBIDO PROCESO”**

PRESENTADO POR EL BACHILLER: **FERNANDEZ QUISPE, Juan**

Bachiller

ASESORA: DRA. CABRERA CUETO YDA ROSA

PARA OPTAR EL TITULO DE ABOGADO

LIMA – PERÚ

2019

FECHA DE SUSTENTACION: 11 DE OCTUBRE DEL 2019

DEDICATORIA

Con mucho cariño a mi esposa
Marisabel y mis hijas Harumy y Misuki
la razón de mi perseverancia, voluntad y
dedicación superación, digna de
admiración y respeto a seguir.

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento especial a todas las personas que fueron partícipes y formaron parte en bien del presente trabajo, a la institución que me dio apertura y facilidad para realizar la investigación y evaluación. A Dios por haberme brindado cada una de las experiencias que me ayudaron a crecer y por haber guiado mis pasos por el sendero del Derecho que ha traído retos y satisfacciones a mi vida.

A todos mis docentes que aportaron en mi formación académica y profesional, como nuestro coordinador Lic. Sr. José Calatayud Hermoza.

ÍNDICE

Índice.....	4
Resumen.....	5
Introducción.....	6

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes legislativos. Fuentes Normativas.....	8
1.2. Marco legal.....	9
1.3. Análisis doctrinario de figuras jurídicas presentes en el expediente y afines nacional y/o extranjero.....	11

CAPITULO II

CASO PRACTICO

2.1. Planteamiento del caso.....	17
2.2. Síntesis del caso.....	17
2.3. Análisis y opinión crítica del caso.....	17

CAPITULO III

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

3.1. Jurisprudencia nacional.....	35
-----------------------------------	----

CONCLUSIONES.....	37
--------------------------	-----------

RECOMENDACIONES.....	38
-----------------------------	-----------

REFERENCIAS.....	39
-------------------------	-----------

ANEXOS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL.....	40
--	-----------

Anexo 1.- Sentencia de la Sala Comercial

Anexo 2.- Sentencia de la Corte Suprema

RESUMEN

El presente trabajo analiza un proceso donde se pretende la anulación del laudo dictado por un Tribunal Arbitral, alegando que el laudo no se encuentra correctamente expedido, dado que viene afectando el derecho de defensa, el principio de congruencia procesal, y la debida motivación. La parte demandada contesta la demanda señalando que en el presente proceso arbitral no se han quebrantado los principios de independencia e imparcialidad. Asimismo, no se afectado el derecho de defensa, puesto que han evaluado prolijamente los argumentos de ambas partes procesales.

Al respecto, cabe señalar que es atribución exclusiva de una de las partes alegar y acreditar la causal de anulación del laudo. Es así que conforme se desprende de lo establecido en los artículos 63° y 64° de la Ley de Arbitraje, es necesario que las parte expongan claramente sus argumentos y los medios probatorios correspondientes.

Palabras claves: arbitraje, tribunal arbitral, laudo, imparcialidad, independencia, anulación, motivación, sala comercial.

INTRODUCCIÓN

El arbitraje es un sistema jurisdiccional privado con reconocimiento constitucional, en donde las partes pueden someter sus controversias a juez privado, previo acuerdo de sometimiento. Es por ello que para que el árbitro o tribunal arbitral se avoque al conocimiento de una controversia, tiene que mediar previamente un convenio arbitral.

La facultad de administrar justicia por parte de un árbitro o tribunal arbitral viene acompañada de las garantías del debido proceso esenciales y que resultan acordes con su naturaleza. Por ejemplo, la pluralidad de instancia es un principio medular de la jurisdicción estatal, sin embargo, no resultaría aplicable al arbitraje.

En este sentido, solamente serán aplicables al proceso arbitral los conceptos inmanentes e ineludibles del debido proceso, como resulta siendo la debida motivación, obligación que es enteramente exigible en el arbitraje.

Según lo que establece la doctrina jurisprudencial, se podrá cuestionar un laudo a través de un proceso de amparo, pero en supuesto muy específicos. También, en vía ordinaria, se podrá solicitar la anulación de un laudo, que, según lo establecido por la Ley de Arbitraje y el Tribunal Constitucional, es la única vía de cuestionamiento de una decisión arbitral ante el Poder Judicial cuando se

afecta el debido proceso. Esta anulación sólo podrá basarse en las causas de forma y nunca de fondo.

En este sentido, si bien los laudos o las sentencias adquieren la calidad de cosa juzgada, no necesariamente los procesos que las originan están libres de falencias. Es por ello que el recurso de anulación es una garantía para los justiciables para impugnar las actuaciones arbitrales que no se han llevado conforme al debido proceso.

Es preciso señalar que el recurso de anulación prohíbe al juez analizar el fondo de la controversia. Asimismo, se debe tomar en cuenta que este recurso únicamente se puede plantear y sustentar en base a causales taxativas señaladas por ley.

La principal causal de anulación de laudo que se invoca en el presente caso, es la causal contenida en el inciso c) y d), numeral 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje –Decreto Legislativo 1071

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.Antecedente Legislativos. Fuentes normativas

La doctrina es unánime al señalar que el arbitraje fue una de las primeras formas de resolver los conflictos. En las sociedades primitivas siempre se vieron en la necesidad de resolver controversias es por ello que en su seno encontramos las manifestaciones primigenias de esta institución.

Esta primera aproximación nos permite aseverar que el arbitraje fue una institución que precedió a la jurisdicción ordinaria, dado que las controversias son parte inherente de la humanidad. La única condición básica para resolver estas controversias era contar un tercero imparcial que abocará al conocimiento y resolución, para efectos busca una solución justa, neutral e imparcial.

Atendiendo a su naturaleza y finalidad, el arbitraje fue concebido como necesidad que pacificaba las controversias. Esta necesidad estuvo presente desde lo albores de la humanidad y siguió presentándose en lugares tan distante como en el continente africano. En efecto, la tribu de los bereberes sometía los conflictos con extranjeros a la decisión de un tercero, que era el sacerdote del mercado. Por otro lado, en América precolombina los sacerdotes y ancianos practicaban el arbitraje.

Si bien existieron diversas manifestaciones de arbitraje a lo largo de la historia, el momento cumbre y de mayor esplendor fue en el derecho romano, en donde se desarrollaron los cimientos sobre los cuales posteriormente se desarrollaron las actuales instituciones y categorías conceptuales acerca del arbitraje.

El arbitraje en la Edad Media fue ejercido por los señores feudales, dado que el poder real no era bien visto y de confiar en esa época. En esa importante época de la historia el arbitraje proliferó entre los personajes del feudalismo más reconocidos.

El arbitraje en este periodo mantuvo algunas características del derecho romano. Por ejemplo, la decisión arbitral no se podía impugnar, se hacía una lectura del laudo en presencia de las partes. El laudo no se podía ejecutar en caso de incumplimiento, dicha capacidad únicamente se encontraba reservada para las autoridades jurisdiccionales de la época.

Al final de este periodo el arbitraje se consolidó como institución, dado que los burgueses, artesanos y comerciantes recurrían a los gremios para obtener justicia. Cabe precisar que los gremios son los antecedentes remotos de las cámaras de comercio, bases del arbitraje actual.

Como es de conocimiento la Constitución de Cádiz tuvo un influjo importante en las constituciones peruanas. Pues bien, la virtud de esta constitución española es que reguló el arbitraje, estableciendo que a ningún español se le puede privar de su derecho de resolver sus controversias por medio de los árbitros. La Constitución de Cádiz estableció desde un principio que el arbitraje se debe a la voluntad de las partes y no a la jurisdicción estatal.

1.2.Marco Legal

Ley de Contrataciones del Estado

Las contrataciones públicas tienen como fuente inicial y principal a la Constitución, la cual señala en su artículo 76 lo siguiente:

- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
- La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

De acuerdo con lo señalado en la Constitución, la contratación de bienes, servicios u obras con cargo a fondos públicos debe efectuarse, obligatoriamente, mediante los procedimientos que establezca la ley.

Conforme a ello, en la actualidad, la norma que regula los procedimientos de contratación pública es la Ley 30225 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 350-2015-EF.

Así también, debemos señalar que la citada ley y su reglamento han tenido modificaciones mediante el Decreto Legislativo 1341 y el Decreto Supremo 056-2017-EF, respectivamente.

Por otro lado, el OSCE emite de manera complementaria mayores disposiciones en materia de contrataciones públicas mediante directivas, opiniones y pronunciamientos con precedentes de observancia obligatoria como los Acuerdos de la Sala Plena.

Así tenemos que todas las entidades de la Administración pública deben aplicar la normativa de contrataciones públicas cada vez que adquieran bienes, servicios y obras del mercado con cargo a pagar con fondos públicos.

No obstante, también es necesario indicar que la citada ley establece en sus artículos 4 y 5 que existen supuestos expresos de contratación pública fuera del ámbito de aplicación de la ley y el reglamento.

Ley de Arbitraje (DL 1071)

Como se ha señalado anteriormente, el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos al que las partes deciden someterse voluntariamente. Sin embargo, a pesar de la autonomía inherente de este instituto, no puede someterse en su seno derechos indisponibles. En efecto, son arbitrables las controversias sobre materias que sean de libre disposición, sin embargo, también son arbitrables aquellas materias que no siéndolo, son permitidas por una mandato legal o tratado.

Cabe precisar que, a diferencia de lo establecido en la Ley General de Arbitraje de 2006, Ley 26572, la nueva ley no establece una lista tasada y expresa de materias arbitrables. En este sentido, para determinar que materias no son arbitrables habrá que interpretar en contrario el artículo 2.1 de la Ley Arbitraje. Es preciso señalar que la libre disponibilidad se encuentra relacionada a su objeto o carácter comercial, ello explica porque el arbitraje se constituye en el medio de solución de conflictos por excelencia en el mundo del comercio.

1.3 Análisis doctrinario de figuras jurídicas presentes en el expediente y afines nacional y/o extranjero

Convenio arbitral

El convenio arbitral es un acuerdo de dos partes que libremente deciden someter una controversia a arbitraje. El acuerdo para someterse a arbitraje deberá constar por

escrito. Desde la celebración del convenio arbitral se genera dos efectos primordiales que determinan la naturaleza del arbitraje. Así tenemos que existe un efecto positivo, que otorga a los árbitros la competencia y facultades necesarias para avocarse al conocimiento de la controversia. Por otro lado, existe un efecto negativo, que determina la exclusión de la jurisdicción ordinaria (Poder Judicial) a partir de la celebración del convenio arbitral.

Respecto al convenio arbitral, cabe precisar que en los contratos con el estado se ha establecido un arbitraje obligatorio para resolver las controversias sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. Es por eso que la cláusula que contiene el convenio arbitral es de incorporación obligatoria en cada contrato, e incluso en caso de no incorporarse en el contrato se entenderá incorporada de pleno derecho una cláusula modelo que es establecida en la normativa de contrataciones.

Arbitraje

El arbitraje es una jurisdicción reconocida constitucionalmente e independiente del Poder Judicial, a través de la cual se resuelven las controversias. Se administra justicia a través de un tribunal arbitral (unipersonal o colegiado), la fuente de poder jurisdiccional se la otorgan las partes en conflicto, las mismas que fijan las reglas del procedimiento o en su defecto se someten a las reglas preestablecidas por una institución arbitral, sea ad hoc o institucional. Cabe precisar que el laudo o resolución de los árbitros es de cumplimiento obligatorio para las partes que han decidido someterse voluntariamente a su jurisdicción. En caso de ser necesario, la

ejecución del laudo recibirá la asistencia del Estado (poder judicial) a fin de cautelar que la decisión final se haga efectiva.

Laudo

Es un documento resolutivo en donde los árbitros deciden y resuelven las controversias que las partes sometieron a su competencia. Una vez expedido, resulta un documento obligatorio para las partes. Cabe precisar que no siempre el laudo se pronuncia sobre el fondo del asunto, dado que también puede, dependiendo de las circunstancias, pronunciarse sobre aspectos formales, como resulta siendo la competencia del Tribunal.

A diferencia de la sentencia judicial que contiene un mandato judicial por el imperium de los jueces, el laudo obliga por la voluntad de las partes. El laudo también tiene la calidad de cosa juzgada, sin embargo, puede ser revisable por cuestiones de forma, a través de un recurso de anulación. La sentencia como regla general no es revisable, salvo nulidad de cosa juzgada fraudulenta o a través de un proceso de amparo cuando existe una transgresión manifiesta de un derecho fundamental de orden procesal o sustancial.

Motivación

De acuerdo a lo que establece la doctrina, motivar desde el punto de vista de la administración justicia implica justificar o fundamentar la decisión que se adopta en el seno de un proceso. Para dicho cometido no es necesario que narre la forma o el método que ha utilizado para llegar a ese pronunciamiento, sino que será necesario, para dotarla validez, justificarla desde un punto de vista aceptable y razonable.

Anulación de laudo

De la misma forma que sucede con la jurisdicción ordinaria, la parte que ha obtenido una resolución desfavorable en el proceso arbitral puede cuestionar lo resuelto por un tribunal arbitral, para ello el ordenamiento jurídico ha previsto un instituto procesal denominado anulación de laudo, el cual puede plantearse ante el Poder Judicial.

Con la anulación del laudo una de las partes pretende cuestionar la decisión arbitral por causales tasadas legalmente, se imposibilita a los jueces entrar al fondo del asunto. Existe un requisito previo para dar trámite a este mecanismo que es la exigencia de haber formulado reclamo ante el tribunal arbitral mediante petición de integración, exclusión, interpretación o rectificación; e incluso al interior del proceso arbitral, haberse formulado y dejado constancia de un reclamo previo, y que este haya sido desestimado.

Reclamo previo o impugnación interna

Existe un requisito previo o de procedibilidad antes de recurrir a la vía judicial para anular el laudo. En efecto, la parte que se considere afectada con la decisión arbitral, deberá formular previamente reclamación, observación u otro mecanismo que permita al tribunal arbitral advertir los errores en que ha incurrido y si es posible enmendarlos en el interior del proceso.

Es así que normativamente se ha previsto que, en el interior del proceso arbitral, la posibilidad de plantear una reconsideración, conocida también como una impugnación interna, el mismo que se encuentra establecido en el artículo 49° de la Ley de Arbitraje. Dicho dispositivo legal señala que contra las resoluciones distintas

al laudo se puede presentar, por razones debidamente motivadas, una reconsideración. El pedido puede basarse en cuestiones de forma o de fondo. Este reclamo previo ante el tribunal arbitral es vital, dado que de lo contrario se entenderá que la parte afectada está convalidando el error u omisión, renuncia a su derecho de cuestionar u objetar una falencia dentro del proceso arbitral. Este reclamo previo constituye un supuesto de procedibilidad del recurso de anulación.

El reclamo previo podrá contener como solicitud una integración, interpretación, rectificación, o la exclusión de laudo. El pedido de integración está relacionado a una omisión del tribunal al pronunciarse sobre algún punto controvertido. El pedido de interpretación busca aclarar algún extremo ambiguo, oscuro, dudoso o impreciso. Por su parte, la rectificación busca subsanar algún error material o formal (cálculo, numérico, de redacción, etc). Finalmente, la exclusión se encuentra referida al caso que el tribunal arbitral se haya pronunciado sobre un extremo no peticionado o que no sea materia de controversia.

Materia arbitrable en materia contratación pública

El arbitraje administrativo es obligatorio para solucionar controversias entre una entidad pública y el contratista, sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. Las partes pueden utilizar este tipo de arbitraje para solucionar los conflictos que inciden en las materias mencionadas. Los temas controvertidos que son objeto de este tipo de arbitraje son la resolución ilegal del contrato, las ampliaciones de plazos contractuales, la liquidación del contrato y la aplicación de penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios. En ese sentido, podemos señalar que la materia arbitrable comprende

de manera amplia las discrepancias sobre los temas señalados, incluyendo, obviamente, el análisis de legalidad de las decisiones administrativas emitidas en la ejecución del contrato.

Finalmente, cabe precisar que no se pueden arbitrar los adicionales de obra que superan el 15% del valor de la obra. En estos casos es necesario que la Contraloría General de la República los apruebe.

CAPITULO II

CASO PRÁCTICO

2.1. Planteamiento del caso

El presente caso demuestra que la garantía del debido proceso no es una obligación exclusiva de la justicia ordinaria, sino también es una exigencia del proceso arbitral. Es por ello que se exige a los árbitros que los laudos estén debidamente fundamentados y motivados. Ello permitirá entender las razones y valoraciones de los elementos de prueba que han sido tomados en cuenta para favorecer a una de las partes. En el presente caso una de las partes denuncia que el laudo afecta sus derechos constitucionales al encontrarse indebidamente motivado.

2.2. Síntesis del caso

En el presente caso la Sala Comercial analiza los fundamentos esgrimidos por ambas partes, así como los medios probatorios ofrecidos, finalmente en base a ello el órgano jurisdiccional decide declarar la nulidad del laudo emitido por el Tribunal Arbitral. El Poder Judicial en vez de analizar si existió o no una indebida motivación, se centra en analizar si el Tribunal Arbitral actuó con imparcialidad.

2.3. Análisis y opinión crítica del caso

En los antecedentes del presente caso judicial la Oficina de Normalización Previsional argumenta que el laudo ha sido emitido violando el derecho a un debido

proceso legal, específicamente en lo referido al derecho constitucional vulnerado- el de ser juzgado por un árbitro imparcial; debe precisarse que, conforme el impugnante lo ha señalado en el recurso de anulación de laudo arbitral.

Asimismo, el nulidisciente ha señalado respecto a la vulneración del derecho a un debido proceso legal, específicamente en lo referido a sus manifestaciones del derecho de defensa, debida motivación, logicidad y valoración probatoria, desarrollando dichos argumentos en que:

- El laudo ha omitido emitir pronunciamiento sobre el informe técnico presentado por la ONP, y no se menciona de modo válido por qué se habría desestimado dicha prueba.
- En el laudo se omite todo pronunciamiento sobre las observaciones de la ONP realizadas tanto a la pericia de ESAN y la pericia de oficio, lo cual vulnera su derecho de defensa. El Tribunal Arbitral arriba a conclusiones sin especificar cuáles son los fundamentos que los llevan a las mismas.
- El laudo arbitral ha omitido emitir pronunciamiento sobre la posición de la ONP sobre los argumentos de lucro cesante y el daño emergente alegado por la Contratista.

De la revisión del recurso que nos ocupa, se aprecia que el impugnante alega en el punto que el laudo ha omitido emitir pronunciamiento sobre el informe técnico presentado por la ONP, y no se menciona de modo válido por qué se habría desestimado dicha prueba.

Al respecto, es oportuno precisar que, para el presente caso, lo que se invoca en estricto es la contravención al derecho de prueba, afectación que válidamente puede ser subsumida en esta causal, en virtud de una interpretación extensiva de la norma al denunciarse en puridad: vulneración al debido proceso, derecho que comprende entre otros- el derecho de producir prueba, siendo ésta relacionada con los hechos que configuren su pretensión o defensa.

Por lo cual, previo a resolver este cuestionamiento, estimamos pertinente desarrollar algunos conceptos relacionados al debido proceso y al derecho de prueba.

En ese sentido según lo que señala la doctrina el derecho al debido proceso, constituye una manifestación procesal inherente a todo sujeto, que le permite estar en actitud de exigir que sus conflictos de intereses o incertidumbre jurídica sean resueltos respetando las garantías mínimas, a través de una decisión objetivamente justa y eficaz.

El referido derecho al debido proceso abarca una doble dimensión, una formal o procedimental referida al trámite para dictar una decisión final, y la otra sustantiva o material, relacionada más bien al fondo de la decisión, protegiendo a las partes de actos o leyes arbitrarias.

En mérito de la discusión que nos ocupa, únicamente nos referimos al plano formal, que, entre otras situaciones, implica el derecho de probar con la utilización de todos los medios legales procedentes y pertinentes. Por tanto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la prueba: "(...) tiene una protección constitucional, en

la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú", mientras que el derecho al debido proceso está relacionado: "(...) al ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios (...) que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la debida motivación".

Debe advertirse además que en materia probatoria el derecho a la utilización de los medios de prueba se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas por las partes en el interior del proceso; así el contenido esencial de este derecho se respeta siempre que una vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas por los órganos jurisdiccionales conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica, según lo alegado y probado.

Ahora bien, dentro de la valoración de la prueba, nos encontramos con dos sistemas: el sistema legal o tasada que prácticamente no es usado en nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano, pues era el propio legislador que establecía a través de las normas legales la eficacia y valor que debía atribuirse a cada medio probatorio y el sistema de libre apreciación de la prueba, mediante el cual el juez es libre para decidir cuando un hecho ha sido suficientemente probado, sin restricciones impuestas por reglas legales de la valoración de la prueba. Dicho de otro modo, a partir de ello el juez no está en la obligación de tomar un criterio acertado sobre los medios de

prueba que presenten las partes, puesto que, por el sistema de libre apreciación de la prueba, podrá pronunciarse respecto de la prueba que le genere convicción, no estando obligado a mencionar las pruebas que para su juicio no resulten ser necesarias o no le hayan generado cierto grado de certeza.

Estando a lo señalado, es preciso mencionar que conforme lo dispone la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo 1071 en el artículo 43°, es facultad legal del tribunal arbitral valorar y/o interpretar los medios probatorios en un u otro sentido, pues dicha norma establece que: "El tribunal arbitral tiene la facultad de determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas (...)"; entonces, el cuestionamiento de dicha facultad es un tema de orden legal; y en segundo lugar, está implícito en la valoración probatoria efectuada por el mencionado ejercicio interpretativo de los medios probatorios atendiendo a las circunstancias o características propias, particulares, etc.; que conllevan a valorarlos en un sentido determinado; además su presencia o ausencia no altera el sentido de la valoración probatoria, puesto que entrar a discutir ello implicaría revalorar la prueba, esto es, analizar el fondo de lo decidido en el proceso arbitral; lo cual escapa de la finalidad del recurso de anulación de laudo arbitral.

Ahora bien, lo que es materia de cuestionamiento es la falta de valoración del Tribunal Arbitral respecto al medio de prueba consistente en el informe técnico presentado por la ONP, pues a decir del nulidiscente no se habría pronunciado sobre éste ni se habría especificado las razones por las cuales se habría desestimado dicha prueba.

En principio, debemos indicar que si bien es cierto el laudo arbitral emite una opinión sobre lo decidido, plasman lo que especifica y puntualmente les ha persuadido, esto es, lo que ha terminado de convencerlos de lo ocurrido (los hechos del caso). Además, no es un requisito de la motivación que los juzgadores valoren y expliquen cada uno de los medios probatorios aportados, menos de los que no les ha causado convicción, sino sólo se pronuncian respecto de los medios probatorios que entre todos los demás, los han considerado de mayor fuerza y contundencia para el proceso.

En ese sentido si bien, la ONP presentó el informe técnico en el proceso arbitral, en estricto solo constituye un medio probatorio más que el Tribunal Arbitral deberá compulsar para dirimir la controversia, pudiendo a mayor abundamiento de su propio criterio, acoger o no, íntegra o parcialmente sus conclusiones, no constituyendo una obligación de los Árbitros ceñirse estrictamente a lo opinado en el referido informe, razón por la cual, la no inclusión de aquellas conclusiones no constituye -per se- un perjuicio que habilite a la Corte Superior a declarar la invalidez de la decisión arbitral.

Además, conforme se verifica del laudo arbitral, los medios probatorios señalados, han sido admitidos y valorados en el proceso arbitral conforme se aprecia de la lectura del referido laudo arbitral , toda vez, que conforme se observa de su contenido, el Tribunal ha señalado que ha valorado la totalidad de los medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el proceso arbitral valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación razonada, siendo que la no indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las

partes no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido valorado, por lo que el Tribunal Arbitral deja establecido que en aquellos supuestos en los que el laudo arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que a criterio del Tribunal Arbitral tuviere respecto a la controversia materia de análisis.

Aunado a ello, conforme se verifica del del laudo arbitral, el Tribunal Arbitral ha explicitado las razones por las cuales ha considerado conveniente para el presente proceso arbitral, la pericia de oficio como la pericia de parte practicada por ESAN; habiendo formado convicción a partir de su valoración conjunta; y teniendo en consideración que el hecho que no se pronuncie expresamente sobre cada una de las pruebas no significa que no hayan sido valoradas, sino por el contrario, ello indica que el Tribunal ha realizado una valoración conjunta de los medios de prueba y a partir de ello se está pronunciando respecto de la prueba que le haya generado cierto grado de certeza o convicción por el sistema de la libre valoración de la prueba; en ese sentido, el nulidisciente no puede alegar la falta de la valoración probatoria, puesto que a ello implicaría revalorar la prueba, esto es, analizar el fondo de lo decidido en el proceso arbitral; lo cual escapa de la finalidad del recurso de anulación de laudo arbitral.

Siendo ello así, este Colegiado Superior concluye que la no inclusión del informe técnico presentado por la ONP, no afecta la ratio decidendi a la que arriba el Tribunal Arbitral, pues de los fundamentos señalados del laudo arbitral fluye que la decisión se encuentra razonable y suficientemente explicada; máxime si conforme se

verifica de la pericia de oficio obrante en el expediente arbitral, se ha podido determinar el incumplimiento de las obligaciones realizadas por la ONP, habiéndosele dado oportunidad a las partes en el proceso arbitral para que formulen sus observaciones a dicho medio de prueba conforme se verifica, las mismas que han sido debidamente absueltas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (entidad que realiza la pericia de oficio) conforme se verifica de los Informes N° 0120 y N° 0221 anexados en el expediente arbitral.

Por otro lado, no es un requisito de la motivación que los juzgadores valoren y expliquen cada uno de los medios probatorios aportados, pudiendo realizar una valoración conjunta de éstos para poder llegar a la conclusión, tal como lo prevé el inciso 1) del artículo 43 del precitado Decreto Legislativo; es decir, apreciar las pruebas en su conjunto, precisar aquellas que le resultan más relevantes para la resolución de la litis y hacerlo en el sentido que le causa convicción. El hecho que lo efectúe en diferente sentido a la posición de una de las partes, es una manifestación de dicha facultad. El principio de la libre valoración de las pruebas, a que alude el precitado dispositivo legal, faculta al árbitro a apreciarlas de acuerdo a su sana crítica, sin que se encuentre obligado a calificarlas en el sentido que deseen las partes, ni mencionar aquellas que no le generen convicción, puesto que, lo contrario implicaría limitar su facultad discrecional en materia probatoria. Siendo, además, el criterio del árbitro si es que considera que las pruebas aportadas son suficientes para la dilucidación de la controversia arbitral. En ese sentido, se desprende de lo argumentado por el recurrente en su recurso de anulación, que lo que busca es la revaloración probatoria, la misma que se encuentra vinculada a la decisión contenida en el laudo arbitral, toda vez que ello implicaría entrar a analizar la controversia

arbitral, que como ya se dijo, la discrepancia en torno a las interpretaciones y conclusiones efectuadas por el Tribunal arbitral escapan a la finalidad misma de la impugnación de laudo arbitral a cargo jurisdicción judicial ordinaria, en virtud del principio arbitral denominado de “Irrevisabilidad del Criterio Arbitral”; ello debido a que, el arbitraje -incluyendo a la anulación del laudo arbitral- se sustenta en el principio de mínima intervención judicial recogido en el artículo 3° del Decreto Legislativo 1071 en el sentido que, en los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga; razón por la cual la alegación que presenta la parte recurrente sobre la falta de valoración del medio de prueba consistente en el informe técnico presentado por la ONP, considero que debe rechazarse.

Aún cuando alguna de las causales específicas sobre recurso de anulación de laudo arbitral están vinculadas estrechamente a la afectación de derechos de orden constitucional, cabe acotar que, tratándose de la invocación de la afectación de derechos constitucionales, como el debido proceso, tutela jurisdiccional, motivación de las resoluciones judiciales, etc., etc. la duodécima disposición complementaria del Decreto Legislativo 1071 preceptúa que: *“Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.”*. Es decir, que al interior del recurso anulación de laudo arbitral, también, cabe exponer la afectación de derechos constitucionales en sede arbitral sobre los que la jurisdicción ordinaria debe emitir pronunciamiento, ya sea amparándola o desestimándola.

En ese orden de ideas, a través de lo regulado por el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución prevé que: “*Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias*”. Asimismo, el inciso 1) del artículo 56 del Decreto Legislativo dispone que: “*Todo laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto (...)*”. Como ya se indicó, en tanto función jurisdiccional el arbitraje no se encuentra exceptuada de observar los principios y derechos de la función jurisdiccional, entre los que encuentra la motivación de la resolución que pone fin a la controversia arbitral, contenida, generalmente, en el respectivo laudo arbitral.

Conforme lo indica la doctrina, el deber de motivación:

"(...) se inserta en el sistema de garantías que las constituciones democráticas crean para tutelar las situaciones jurídicas de los individuos ante el Poder Estatal y, en particular, ante las manifestaciones del mismo en el ámbito de la jurisdicción".

En similar sentido debe entenderse lo concerniente a la MOTIVACIÓN DE UN LAUDO, ya que esta es necesaria a fin que "el contenido del Laudo sea producto de una exégesis racional, y no el fruto de la arbitrariedad; se entiende que la motivación es un deber consistente en la expresión de los motivos o razones que explican la decisión y los argumentos en que se ha basado el Tribunal, constituyendo así una garantía procesal de las partes que les permite conocer las razones por las que sus pretensiones fueron estimadas o desestimadas.

En cuanto a la motivación del laudo, la doctrina señala que *“el contenido del Laudo sea producto de una exégesis racional, y no el fruto de la arbitrariedad; se entiende que la motivación es un deber consistente en la expresión de los motivos o razones que explican la decisión y los argumentos en que se ha basado el Tribunal, constituyendo así una garantía procesal de las partes que les permite conocer las razones por las que sus pretensiones fueron estimadas o desestimadas”*.

Sin embargo, límites para dicha potestad, se encuentra establecidos por la propia Ley de Arbitraje en el artículo 62° numeral 02, que prohíbe expresamente analizar, no solo el fondo de la controversia o contenido de la decisión, sino también calificar los criterios, ó interpretaciones expuestas en este caso puntual por el Tribunal Arbitral.

Se debe entender que la motivación debe estar relacionada a las cuestiones decisorias, es decir, que las razones por las cuales se ampararon o no las pretensiones principales del proceso arbitral, se encuentren debidamente expresadas y sustentadas.

Por su parte, el derecho de defensa previsto en el artículo 139° inciso 14) de la Constitución Política del Perú se constituye en un derecho constitucional de naturaleza procesal que también forma parte del derecho al debido proceso y que se proyecta como la prohibición de indefensión de las partes en el proceso, así como la contradicción de los actos procesales, permitiéndosele plantear los medios impugnatorios que la ley establece, es decir, que el juez debe garantizar la observancia de ese derecho en todas las etapas procesales ya que su vulneración podría acarrear la nulidad del acto que lo infringe.

Aquel derecho constitucional cuenta además con una doble dimensión tanto material como formal, entendiéndose por la primera el derecho de la persona de ejercer su propia defensa desde el instante en que toma conocimiento del proceso y, por el segundo, que se cuente con el asesoramiento y patrocinio de un abogado durante el tiempo que dure el proceso, y bajo los parámetros establecidos por ley.

En ese orden de ideas, estando a que en este extremo el recurso de anulación de laudo arbitral deducido por la Oficina de Normalización Previsional - ONP invoca el quebrantamiento del derecho constitucional de la motivación de las decisiones judiciales [inciso 5) del artículo 139° de la Constitución: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias] y [el inciso 14) del artículo 139°: El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad, previsto también en la referida carta magna.

En principio, debe señalarse que la función de control judicial del Poder Judicial sobre el laudo, en mérito de la causal invocada, no puede importar en modo alguno la revisión del fondo de la controversia ni el razonamiento seguido por el Tribunal Arbitral; la razón de lo señalado se basa en que el recurso de anulación de laudo no es una instancia, sino un proceso autónomo en el que de modo puntual se verifica el cumplimiento de determinados supuestos de validez del laudo arbitral, no debiendo perderse de vista que las partes se han sometido de modo voluntario y expreso a la

jurisdicción arbitral que resuelve la controversia de modo exclusivo y excluyente, por lo que la función de este Colegiado no es la de efectuar ni revisar la valoración probatoria ni corregir los errores in procedendo o in iudicando que se pudieran haber producido durante el proceso arbitral o al emitirse el laudo, salvo claro está, que estos configurasen alguna de las causales de nulidad expresamente previstas por ley. Por tanto, el Poder Judicial sólo podrá ejercer la función de control judicial que le ha sido encomendada por la ley, según el diseño normativo del arbitraje y su interrelación con el sistema de justicia a cargo del Estado, no equivale a una función revisora propia de una instancia de grado.

Pues bien, resolviendo lo señalado en el recurso de anulación en cuanto, a la afirmación efectuada por la Oficina de Normalización Previsional - ONP correspondiente a que en el laudo se omite todo pronunciamiento sobre las observaciones de la ONP realizadas tanto a la pericia de ESAN y la pericia de oficio, lo cual vulnera su derecho de defensa, es preciso referir, que conforme lo señala el Tribunal Arbitral ha especificado con referencia a lo señalado por el nulidisciente, que no puede determinarse que el análisis que ha realizado no toma en cuenta los argumentos de la ONP respecto a los medios probatorios consistentes en la pericia de parte de ESAN y en la pericia de oficio, pues dichas consideraciones a las que arribo el Tribunal parten del estado de certeza que éste alcanza llegando a tener la convicción que le genera dichos medios de prueba.

Además, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de valorar las pruebas conforme a su entera convicción, tal como lo prevé el inciso 1) del artículo 43 del precitado Decreto Legislativo; es decir, apreciar las pruebas en su conjunto, precisar aquellas que le

resultan más relevantes para la resolución de la litis y hacerlo en el sentido que le causa convicción. El hecho que lo efectúe en diferente sentido a la posición de una de las partes, es una manifestación de dicha facultad. El principio de la libre valoración de las pruebas, a que alude el precitado dispositivo legal, faculta al árbitro a apreciarlas de acuerdo a su sana crítica, sin que se encuentre obligado a calificarlas en el sentido que deseen las partes, puesto que, lo contrario implicaría limitar su facultad discrecional en materia probatoria. Siendo, además, el criterio del árbitro si es que considera que las pruebas aportadas en el proceso arbitral son suficientes para la dilucidación de la controversia arbitral.

En ese sentido, se observa de lo señalado que lo que busca el recurrente es entrar a analizar la controversia arbitral que como ya se dijo la discrepancia en torno a las interpretaciones y conclusiones efectuadas por el Tribunal arbitral escapan a la finalidad misma de la impugnación de laudo arbitral a cargo de la jurisdicción judicial-ordinaria, en virtud del principio arbitral denominado de “Irrevisabilidad del Criterio Arbitral”; ello debido a que, el arbitraje -incluyendo a la anulación del laudo arbitral- se sustenta en el principio de mínima intervención judicial recogido en el artículo 3° del Decreto Legislativo 1071 en el sentido que, en los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga; razón por la cual dicho argumento debe ser desestimado.

Asimismo, respecto a la alegación realizada por la parte nulidiscente correspondiente a que el Tribunal Arbitral arriba a conclusiones sin especificar cuáles son los fundamentos que los llevan a las mismas, debe precisarse que, que de la revisión del

laudo arbitral se observa que el Tribunal Arbitral ha cumplido con su deber de motivar su laudo alegando los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales ha llegado a dicha decisión arbitral.

En ese sentido, se ha verificado del referido laudo que se ha tomado en cuenta las posiciones de las partes en el proceso arbitral para llegar a la solución de la controversia; teniendo también en consideración los medios de pruebas que presentaron las partes en el proceso y el medio probatorio de oficio solicitado por el Tribunal, los mismos que le llevaron a tener una mayor convicción para la solución de la litis; razones por las cuales se llega a determinar que en el laudo arbitral se ha especificados los argumentos que conllevaron a tal decisión arbitral, máxime si lo que busca el recurrente con ello, es entrar a analizar la controversia arbitral que como ya se dijo la discrepancia en torno a las interpretaciones y conclusiones efectuadas por el Tribunal arbitral escapan a la finalidad misma de la impugnación de laudo arbitral a cargo de la jurisdicción judicial ordinaria, en virtud del principio arbitral denominado de “Irrevisabilidad del Criterio Arbitral”; ello debido a que, el arbitraje - incluyendo a la anulación del laudo arbitral- se sustenta en el principio de mínima intervención judicial recogido en el artículo 3° del Decreto Legislativo 1071 en el sentido que, en los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga.

Finalmente, respecto a la afirmación efectuada por el nulidiscente, esto es, que el laudo arbitral ha omitido emitir pronunciamiento sobre la posición de la ONP sobre los argumentos de lucro cesante y el daño emergente alegado por la Contratista; debe precisarse que, conforme se verifica el Tribunal ha señalado los fundamentos sobre el

lucro cesante y daño emergente, específicamente de la referida resolución; además conforme se observa del laudo arbitral se verifica el análisis realizado por el Tribunal Arbitral respecto a los tipos de responsabilidad que existen y finalmente los fundamentos que configuran la responsabilidad contractual en la que se presenta el caso materia de litis. Además, ha indicado el Tribunal Arbitral que sobre el análisis referido a determinar si en la realidad la entidad había incumplido con los elementos o factores determinantes de acuerdo con lo establecido en el contrato se encuentra especificado en el propio laudo. En ese sentido, se puede determinar que el Tribunal se ha pronunciado tanto en el laudo arbitral como en la resolución que resuelve el recurso post laudo todas las alegaciones realizadas por las partes, como lo es, la señalada por la entidad (ONP), razón por la cual, el argumento señalado por el nulidisciente debe ser desestimado, máxime si por medio de dicho argumento el impugnante pretende el reexamen de lo decidido por el Tribunal Arbitral, lo cual, como se ha manifestado en la presente resolución, no forma parte de la finalidad del recurso de anulación de laudo, tal como lo establece la segunda parte del inciso 2) del artículo 62° del Decreto Legislativo número 1071 (Decreto Legislativo que Regula el Arbitraje) que prevé: *“Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.”*. El Precitado dispositivo legal plasma el principio arbitral denominado de “Irrevisabilidad del Criterio Arbitral”, salvo en los casos prefijados por ley.

Por otro lado, respecto a la causal d) del numeral 1 artículo 63° de la Ley de Arbitraje es preciso mencionar que su fundamento se encuentra específicamente determinado en la falta de competencia o legitimación de los árbitros para conocer y

resolver sobre cuestiones litigiosas que no le han sido encomendadas; en ese sentido, así como el órgano jurisdiccional de derecho público no puede resolver más cuestiones que aquellas que los litigantes someten a su decisión, incurriendo en incongruencia si resuelve otras distintas, así también el órgano de arbitraje privado que cuando resuelve puntos que no fueron sometidos a su decisión incurre en exceso de jurisdicción.

En cuanto a la afirmación efectuada por el recurrente, esto es, que el Tribunal Arbitral se ha pronunciado sobre materias no sometidas a arbitraje; ello en razón, a que el Tribunal Arbitral debía pronunciarse respecto a los hechos acaecidos hasta el 30 de setiembre de 2013; sin embargo, al momento de la emisión del laudo, el Tribunal Arbitral toma en consideración la pericia de oficio que analiza y se pronuncia respecto de plazos que van más allá del 30 de setiembre de 2013, lo que implica que se haya utilizado como elemento para determinar el daño un informe pericial que va más allá de lo requerido por las partes, en lugar de haberse considerado la demanda de la Contratista y sus acumulaciones; debe precisarse que, conforme se verifica en el laudo arbitral, el Tribunal Arbitral advierte que las pretensiones relativas a daños y perjuicios de las acumulaciones presentadas señalan únicamente la no entrega de 86, 680 informes y 57, 045 informes hasta el 30 de setiembre de 2013, cantidad que es menor a la que se señalaba en la pericia de oficio, por lo que dicho Colegiado Arbitral se pronuncia únicamente respecto de lo solicitado, esto es, la cantidad de informes no entregados hasta el 30 de setiembre de 2013; además se observa de la resolución N° 51 de fecha 05 de agosto de 2016, que dicho extremo ha sido debidamente aclarado, conforme ha señalado el Tribunal; en ese sentido, se observa de lo precisado, que el Tribunal ha laudado sobre la materia

sometida a arbitraje, esto es, de los hechos acaecidos hasta el 30 de setiembre de 2013 conforme se ha señalado en la demanda arbitral y en las demandas primera y segunda acumuladas que fueron admitidas al proceso arbitral; razón por la cual el argumento sostenido por el nulidisciente considero que puede ser amparado.

Finalmente, en cuanto a la alegación correspondiente a que el Tribunal optó por pronunciarse respecto a los intereses legales no solicitados, razón por la cual, se habría pronunciado sobre una materia que no fue sometida a su competencia, debe precisarse que, conforme se verifica del laudo arbitral, el Tribunal Arbitral ha analizado la solicitud de intereses presentada por la parte demandante en la demanda arbitral; siendo además que dicha pretensión fue debidamente aclarada mediante la resolución N° 51 de fecha 05 de agosto de 2016, habiendo sido debidamente explicitada ; razón por la cual, el argumento de la parte nulidisciente debe ser rechazado, toda vez, que el cuestionamiento que realiza la parte nulidisciente correspondiente a los referidos intereses legales se encuentran debidamente solicitados en la demanda arbitral de fecha 25 de marzo de 2013, así como en las ampliaciones de demanda de fecha 26 de agosto y 30 de setiembre de 2013, en ese sentido, dicha alegación tampoco se encuentra inmersa en la causal d) regulada en el artículo 63° numeral 2) del Decreto Legislativo N° 1071.

En base a todos los argumentos expuestos, considero que el laudo arbitral impugnado no incurre en las causales previstas en la duodécima disposición complementaria ni en la causal d) regulada en el artículo 63° numeral 1) del D.L N° 1071, por lo que se debió desestimar el recurso de anulación de laudo arbitral.

CAPITULO III

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

3.1. Jurisprudencia nacional

Primera Sala Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sentencia recaída en el Expediente N° 000060--2017. Lima, 09 de mayo de 2017

La Sentencia señala que la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal Arbitral sobre una cuestión relevante de la controversia, ocasiona la nulidad del laudo arbitral por afectación al derecho de motivación. El respeto al derecho a la motivación de las resoluciones no está dirigido a garantizar que la controversia sea resuelta en un determinado sentido, ni implica un instrumento para calificar si el sentido de la decisión del árbitro fue correcto o incorrecto; sino que, independientemente del sentido de la solución adoptada, proscribiremos que ésta sea adoptada arbitrariamente, sin expresar razones, o expresando unas que por carecer de correspondencia con la lógica del razonamiento, deban ser calificadas más como excusas que como verdadero sustento de lo resuelto.

Primera Sala Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sentencia recaída en el Expediente N° 0000340--2016. Lima, 18 de abril de 2017

Esta sentencia pone de relieve la importancia de la motivación en los laudos arbitrales. En este sentido, todo laudo deberá estar debidamente motivado para otorgar legitimidad a los fallos jurisdiccionales. Ahora bien, del contenido del laudo se advierte que existe una manifiesta incongruencia, dado que el mismo no tiene una precisa correlatividad entre lo que se resuelve y peticiona. Es por ello que es nulo el laudo arbitral que carece de un mínimo de motivación exigible que justifique la decisión asumida por el Tribunal Arbitral.

Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente N° 0000142-2011-PA/TC. Lima, 21 de setiembre de 2011.

Esta Sentencia precisa que solamente es competencia de los árbitros lo que es materia arbitrable. Dado que la decisión final solamente se verá legitimada si los árbitros resuelven aquellas controversias que son disponibles o que están autorizadas por mandato legal. Si dicha regla no se respeta, la jurisdicción estatal está habilitada para cuestionar la decisión de los árbitros.

Cabe precisar que la materia arbitrable en el arbitraje administrativo se encuentra determinada por Ley de Contrataciones del Estado, en consecuencia, no se rige por lo establecido en la Ley de Arbitraje.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CASO

CONCLUSIONES

- a) Debe reiterarse que no es pertinente ni relevante menos aún apropiado pronunciarse acerca de si el Órgano Judicial comparte o no el criterio valorativo de los hechos o interpretativo de la normativa del caso realizado por el tribunal arbitral, esto es, las razones asumidas por éste, pues como se ha señalado tantas veces en la presente trabajo, el recurso de anulación de laudo no es una instancia judicial ni está previsto para revisar criterios, por tratarse aquella de una jurisdicción (arbitral) distinta e independiente a la judicial a la que se han sometido las partes, y que debe ser acatada y respetada.
- b) El recurso de anulación es una acción independiente y autónoma del proceso arbitral. En este sentido, constituye un auténtico proceso. El hecho que se cuestione un laudo arbitral no quiere decir que se ha formulado un recurso, dado que el demandante deberá iniciar un proceso judicial autónomo e independiente, dirigido a cuestionar la validez de un laudo emitido en la jurisdicción arbitral.
- c) La anulación del laudo no puede analizar el fondo de la controversia, dado que ello implicaría que el poder judicial frente a la jurisdicción arbitral se convierta

en su suprainstancia de revisión o casatoria, afectado y desarticulando la autoridad de la cosa juzgada.

RECOMENDACIONES DEL CASO

- a) De acuerdo a lo que ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional, existe una eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales, lo cual quiere decir que tanto las entidades públicas y privadas deben actuar con estricto apego y respecto de los derechos fundamentales. Si bien es cierto el proceso de anulación de laudo es una vía excepcional y extraordinaria que tiene por finalidad revisar la validez del laudo en función a determinadas causales previstas en la Ley de Arbitraje, no es menos cierto que la falta de motivación afecta manifiestamente el derecho fundamental al debido proceso, por lo que considero que el Poder Judicial deberá analizar con seriedad y prolijidad si en un caso concreto ha existido por parte del Tribunal Arbitral una indebida motivación al expedir el laudo y si éste ha tenido un impacto relevante en el resultado del proceso.

REFERENCIA

CANTUARIAS SALAVERY, Fernando

2007 Arbitraje comercial y de las inversiones. Lima: Fondo Editorial UPC.

GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA, César.

2018 Arbitraje comercial nacional e internacional. Lima: Fondo Editorial PUCP.

MORON, Juan Carlos.

2018 Aspectos jurídicos de la contratación estatal. Lima: Fondo Editorial PUCP.

RIVAS CASO, Gino.

2017 Arbitraje. La motivación de las decisiones arbitrales. Lima: Biblioteca del Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre.

WONG ABAD, Julio

2013 La motivación defectuosa como causal de nulidad de laudo. Lima: Jurista Editores.

ANEXOS